



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1995/48
24 de enero de 1995

ESPAÑOL
Original: FRANCES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
51º período de sesiones
Tema 11 del programa provisional

ULTERIOR PROMOCION Y FOMENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS
LIBERTADES FUNDAMENTALES, CON INCLUSION DE LA CUESTION DEL
PROGRAMA Y LOS METODOS DE TRABAJO DE LA COMISION

Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos

Informe del Secretario General presentado en aplicación de
la resolución 1994/54 de la Comisión de Derechos Humanos

INDICE

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION	1 - 7	3
I. OPINIONES COMUNICADAS POR LOS ESTADOS	8 - 16	4
1. Croacia	8	4
2. Ghana	9 - 10	4
3. Iraq	11 - 12	4
4. Kuwait	13	5
5. Jamahiriya Arabe Libia	14 - 15	5
6. Uganda	16	5

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
II. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS COMUNICADAS POR LAS INSTITUCIONES NACIONALES	17 - 28	6
1. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos (Argelia)	17 - 19	6
2. La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (Francia)	20	7
3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (India)	21 - 24	7
4. El Comité Superior de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Túnez) . . .	25	8
5. La Comisión Canadiense de Derechos Humanos .	26 - 28	8
III. ANALISIS DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS	29 - 35	9
IV. RECOMENDACIONES	36	11

INTRODUCCION

1. En el párrafo 11 de la resolución 1994/54, titulada "Instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos", que fue aprobada en su 50º período de sesiones, la Comisión pidió al Secretario General que preparase un informe, para su presentación a la Comisión en su 51º período de sesiones, utilizando los comentarios de los Estados y las instituciones nacionales acerca de las posibles formas de participación de esas instituciones en las reuniones de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos.

2. En aplicación de dicha resolución, el Secretario General remitió una carta, el 30 de marzo de 1994, a las instituciones nacionales de derechos humanos y, el 16 de mayo de 1994, una nota verbal a los gobiernos, pidiéndoles que le transmitieran sus observaciones y sugerencias sobre las formas de esta participación de las instituciones nacionales.

3. Al 15 de diciembre de 1994, se habían recibido respuestas de los Gobiernos de los países siguientes: Angola, Argentina, Croacia, Ghana, Iraq, Jamahiriya Arabe Libia, Kuwait, Mauricio, Pakistán, Uganda y Zimbabwe. También se habían recibido respuestas de las instituciones nacionales siguientes: el Observatorio Nacional de Derechos Humanos (Argelia), la Comisión Canadiense de Derechos Humanos (Canadá), la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (Francia), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (India), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (México), la Comisión de Derechos Humanos (Nueva Zelandia) y el Comité Superior de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Túnez).

4. El Secretario General sólo tuvo en cuenta las informaciones, observaciones y sugerencias específicas de cada Estado e institución nacional en la medida en que respondían a la petición formulada en la nota verbal y en la carta, de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 1994/54.

5. De las respuestas recibidas de las instituciones nacionales se desprende que éstas son conscientes en conjunto de la importante función que desempeñan y que podrán desempeñar en la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Las instituciones nacionales conceden igualmente gran importancia a la interacción de sus actividades en el plano nacional con las de los órganos de las Naciones Unidas encargados de los derechos humanos.

6. En el presente documento se trata de establecer una síntesis de las respuestas comunicadas por los Estados y de algunas observaciones y sugerencias formuladas por las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos acerca de las formas que podría revestir una participación de las instituciones nacionales en las reuniones de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos.

7. Conviene recordar que los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales, según fueron aprobados por la Asamblea General en su resolución 48/134, sirven de guía para la definición y el modo de funcionamiento de las instituciones nacionales.

I. OPINIONES COMUNICADAS POR LOS ESTADOS

1. Croacia

8. El Gobierno croata considera importante la aportación del ombudsman en la esfera de la defensa y de la protección de los derechos de los ciudadanos. Desea, en particular, que la oficina del ombudsman participe en las reuniones de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos. Sin precisar las formas de esta participación, se declara dispuesto a aceptar toda forma de colaboración idéntica a la que las Naciones Unidas han establecido con otras instituciones nacionales.

2. Ghana

9. El Gobierno de Ghana se pronuncia a favor de un estatuto independiente de las instituciones nacionales que podrán participar en las reuniones de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos. Invoca las razones siguientes:

- a) las instituciones nacionales comunican al Gobierno todas las informaciones necesarias sobre los derechos humanos; también tienen la tarea de asesorar al Gobierno sobre cualquier cuestión relativa a los derechos humanos y a la responsabilidad de los Estados con respecto a los acuerdos internacionales en que éstos son Partes;
- b) las instituciones nacionales conocen la situación de los derechos humanos sobre el terreno; por consiguiente, están en condiciones adecuadas de contribuir de manera positiva a los trabajos de los órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

10. Esta participación directa de las instituciones nacionales en las reuniones de las Naciones Unidas podría contribuir a reforzar y garantizar su independencia institucional. Su aportación en las discusiones sobre las cuestiones planteadas en las reuniones podría ser importante.

3. Iraq

11. El Gobierno del Iraq destaca la importancia de la participación de las instituciones nacionales en las reuniones de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos. Citando el párrafo 36 de la Declaración y Programa de Acción de Viena relativo a las instituciones nacionales, que estipula que "la Conferencia Mundial de Derechos Humanos reafirma el importante y constructivo papel que desempeñan las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, en particular en lo que respecta a su capacidad para asesorar a las autoridades competentes y a su papel en la reparación de las

violaciones de los derechos humanos", se pronuncia a favor de la participación de esas instituciones nacionales en las reuniones de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos. Desea una participación efectiva y regular de esas instituciones, y ello en coordinación con los gobiernos interesados. A tal efecto, sugiere un estatuto de observador para esas instituciones.

12. Haciendo suyo el párrafo 86 de la Declaración y Programa de Acción de Viena, en el que se recomienda que "los representantes de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos convoquen reuniones periódicas auspiciadas por el Centro de Derechos Humanos a fin de examinar los medios de mejorar sus mecanismos y compartir experiencias", el Gobierno del Iraq estima que este tipo de reuniones permitiría a esas instituciones intercambiar sus experiencias y mejorar su mecanismo operacional a fin de promover sus esfuerzos de protección de los derechos humanos.

4. Kuwait

13. Kuwait atribuye gran importancia a la contribución de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, sin formular sugerencias.

5. Jamahiriya Arabe Libia

14. El Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia aprecia la importante función que desempeñan las instituciones nacionales, tanto en los preparativos como en los trabajos de las reuniones de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos, habida cuenta de su experiencia y competencia en esta esfera. Además, al ser esas instituciones nacionales organizaciones no gubernamentales, su poder y competencia deben ser conformes a las disposiciones del Artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, en el que se recomienda al Consejo Económico y Social que adopte "arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo".

15. El Gobierno de la Jamahiriya Arabe Libia propugna, pues, que se otorgue un estatuto de observador a esas instituciones, al tiempo que se limite su participación a la expresión de opiniones y de consejos técnicos. La competencia de esas instituciones no debe incluir la adopción de decisiones ni la redacción de informes, como tampoco las actividades que puedan afectar a la soberanía de los Estados Miembros, ni la crítica de las posiciones de esos Estados en relación con las cuestiones de derechos humanos debatidas en las reuniones de las Naciones Unidas.

6. Uganda

16. En Uganda existe, en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el Ministerio de Justicia, una oficina de derechos humanos encargada de coordinar la promoción y la protección de los derechos humanos en el país. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que mantiene el enlace entre el

Gobierno y las instituciones internacionales de protección de los derechos humanos. El Gobierno de Uganda estima que las organizaciones no gubernamentales nacionales de protección de los derechos humanos deben demostrar a la Comisión de Derechos Humanos su credibilidad en lo que respecta a la protección de los derechos humanos en el país.

II. OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS COMUNICADAS POR LAS INSTITUCIONES NACIONALES

1. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos (Argelia)

17. El Observatorio Nacional de Derechos Humanos, institución nacional de Argelia para la protección y promoción de los derechos humanos, ha formulado las observaciones y sugerencias siguientes:

- a) Las instituciones nacionales cuya creación, composición y modo de funcionamiento sean conformes a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular la resolución 48/134, de 20 de diciembre de 1993, pueden ser admitidas, a petición suya, a asistir y participar en calidad de observadores en todas las actividades y reuniones de las Naciones Unidas relativas a los derechos humanos.
- b) La petición de la concesión del estatuto de observador presentada por una institución nacional debe ser apoyada por una opinión conforme de los representantes habilitados del Estado interesado ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Sin embargo, en algunas situaciones extremas, la solicitud puede ser admisible si el Estado interesado se abstiene, en todo caso, de cualquier acción que pueda dar a suponer que se opone a ello.
- c) Queda entendido que no puede considerarse que cualquier declaración o toma de posición hecha dentro del marco de los períodos de sesiones y de las reuniones de las Naciones Unidas concernientes a los derechos humanos por una institución nacional comprometen al Estado o al gobierno del país de la institución correspondiente. A este respecto, el pluralismo de la composición de la institución nacional, así como el atributo de independencia de que se supone goza exigen que se separen claramente las opiniones expresadas por la institución nacional y las declaraciones y tomas de posición de los representantes habilitados del Estado interesado, único competente para expresar sus posiciones oficiales.

18. En opinión del Observatorio Nacional de Derechos Humanos, el Comité de coordinación de las instituciones nacionales mencionado en el párrafo 7 de la resolución 1994/54 podría continuar actuando como órgano de reflexión y de concertación entre las instituciones nacionales y entre éstas y los demás órganos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos. El Observatorio sugiere que el Comité se dote de un reglamento que le permita en su momento actuar como instrumento de facilitación de contactos y de

relaciones entre las instituciones y las estructuras y órganos adecuados de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos humanos.

19. Sin poner en tela de juicio el principio de la universalidad que informa el conjunto de los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y que se pone de manifiesto para las instituciones nacionales mediante la aprobación de un cuerpo de normas uniformes llamado "Principios de París" (Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales; véase la resolución 48/134 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, anexo), el Observatorio sugiere que hay que dejar la puerta abierta a una cierta flexibilidad para tener en cuenta las diferencias en la tradición constitucional de algunos Estados, los particularismos de su práctica judicial o las características de su sistema de administración pública. Esto significa, en otras palabras, que convendría utilizar una fórmula rígida que impida o frene la tendencia muy positiva observada desde hace unos diez años en la creación y el fortalecimiento de instituciones nacionales en el mundo.

2. La Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (Francia)

20. La Comisión francesa propone que las instituciones nacionales participen en las reuniones de las Naciones Unidas a dos niveles:

- a) El Comité de coordinación de las instituciones nacionales se expresaría, por conducto de su coordinador o de un miembro que tuviera el mandato para ello, en nombre de todos sus miembros sobre cuestiones de interés general que hubieran sido objeto de concertación. Tendría entonces el mismo estatuto que las organizaciones no gubernamentales reconocidas como entidades consultivas por el Consejo Económico y Social; sería observador en los órganos en que las organizaciones no gubernamentales consultivas no estuvieran presentes.
- b) Cada una de las instituciones podrá participar en su propio nombre, en el banco de su Estado, cuando éste desee acogerlas como miembro de la delegación. Esto supondría continuar la situación actual.

3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (India)

21. La Comisión Nacional india considera que las instituciones nacionales podrían participar, en primer lugar, en los períodos de sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos y, también, en las reuniones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para examinar el conjunto de cuestiones relativas a los derechos humanos y cuestiones humanitarias.

22. Evocando el carácter independiente de esas instituciones, la Comisión india sugiere que las instituciones nacionales participen en las reuniones por su propia cuenta, cuando la Comisión de Derechos Humanos aborde en su período anual de sesiones una cuestión que les interese, y que se les

autorice a hacer uso de la palabra en su propio nombre y no, como en la actualidad, desde los lugares atribuidos a sus Estados respectivos.

23. En lo que respecta a la prelación, las instituciones nacionales podrían hacer uso de la palabra en las sesiones de la Comisión, después de los Estados miembros de la Comisión al igual que los demás Estados Miembros de las Naciones Unidas o de los que tienen estatuto de observador, pero antes de las organizaciones intergubernamentales, las instituciones y programas de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales.

24. En lo que respecta a la Tercera Comisión de la Asamblea General, convendría dar la palabra a las instituciones nacionales cada dos años, cuando ese órgano examine los trabajos de las instituciones, pero, en ese caso, su presencia activa es menos necesaria que en los períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos.

4. El Comité Superior de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (Túnez)

25. El Comité Superior de Túnez ha sugerido que las instituciones nacionales dispongan de un lugar reservado, con la posibilidad de hacer uso de la palabra, bien en la sede de su delegación o, mejor aún, directamente, como era el caso de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993).

5. La Comisión Canadiense de Derechos Humanos

26. Aunque las resoluciones de los órganos de las Naciones Unidas y la Declaración de Viena reconozcan la importante función que desempeñan las instituciones nacionales en la promoción y protección de los derechos humanos, estos organismos no gozan de un estatuto preciso ante los órganos de las Naciones Unidas encargados de los derechos humanos. Resulta de ello que, en los períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, los representantes de instituciones nacionales no tienen derecho a hacer uso de la palabra sino en cuanto miembros de las delegaciones de sus respectivos países y desde los lugares atribuidos a éstas. Esta situación parecería contradecir el principio de la independencia de las instituciones nacionales tal como está estipulado en los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (resolución 48/134 de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1993, anexo).

27. Por ello, la Comisión canadiense desearía que las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos disfrutasen de un estatuto análogo al de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Esto implicaría que se reservaran asientos a las instituciones nacionales en la sala de reunión de la Comisión de Derechos Humanos y que sus representantes pudieran hacer uso de la palabra sobre las cuestiones de los derechos humanos que se discutieran.

28. La Comisión canadiense es consciente de que, por razones de orden logístico, no será posible que la totalidad de los representantes de las instituciones nacionales hagan uso de la palabra sobre cada tema del programa

de la Comisión. Por consiguiente, convendría que, en lo que respecta a las cuestiones de gran importancia, el coordinador designado por los miembros del Comité de coordinación de las instituciones nacionales tomara la palabra en nombre de todas las instituciones nacionales; y, por otra parte, debería preverse la posibilidad de que los representantes de las instituciones nacionales que desearan expresarse sobre cuestiones que presentaran un interés particular para su propio organismo así lo hicieran.

III. ANALISIS DE LAS INFORMACIONES RECIBIDAS

29. A la luz de las informaciones recibidas que acaban de exponerse y de conformidad con el párrafo 11 de la resolución 1994/54, el Secretario General habría deseado recibir un mayor número de observaciones formuladas por los Estados y las instituciones nacionales acerca de las formas de participación de las instituciones nacionales en las reuniones de las Naciones Unidas dedicadas a los derechos humanos.

30. Conviene recordar que los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales, aprobados por la Asamblea General en su resolución 48/134, constituyen un progreso importante en este proceso. Esos principios, reconocidos en el plano internacional, deberían servir de líneas directrices fundamentales para el establecimiento de instituciones nacionales encargadas de promover y de proteger los derechos humanos. Por otra parte, conviene recordar igualmente que las instituciones nacionales tuvieron estatuto de observador en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en junio de 1993.

31. Como cabe observar a través de las respuestas, la mayoría de los Estados estiman que las instituciones nacionales deberían actuar con toda independencia y que tal independencia debería constar en la carta constitutiva de esas instituciones. Es decir que debería definirse principalmente el campo de competencia de las instituciones desde el punto de vista de las obligaciones del Estado en materia de legislación internacional sobre los derechos humanos. Así pues, ¿cuál será de hecho la naturaleza de las relaciones que el gobierno podría desarrollar con las instituciones nacionales a fin de generar una acción convergente y eficaz en favor de los derechos humanos? En efecto, el atributo de independencia de que se suponen gozan las instituciones nacionales exigiría una separación de las opiniones del Estado de las de las instituciones nacionales. Habría también que establecer una coordinación perfecta entre los dos órganos para evitar superposiciones y conflictos de competencias y hacer de modo que las opiniones, recomendaciones, propuestas e informes se tuvieran en cuenta en todas las etapas de la elaboración de la legislación sobre los derechos humanos. Ahora bien, esto parece ser el caso actualmente, cuando un número cada vez mayor de Estados asocian las instituciones nacionales a la redacción de los documentos para la promoción y la protección de los derechos humanos. Por vía de ejemplo de cooperación, cabe citar el estudio de los informes de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos y de la condición de las personas incapacitadas hecho por la Cámara de los Comunes del Canadá. Lo mismo ocurre con Francia y Australia.

30. En este mismo orden de ideas, muchos Estados estiman que las instituciones nacionales podrían participar en las reuniones de las Naciones Unidas por su propia cuenta. Esto implica que esas instituciones sean creíbles. Ahora bien, la credibilidad de una institución nacional depende de la posición del texto que la ha establecido en la jerarquía de las normas nacionales. Convendría que las Naciones Unidas velaran por que esas instituciones, para que puedan participar en sus reuniones, sean establecidas bien sea en la Constitución o en un texto de ley que les dé una personalidad moral independiente del Estado. Igualmente deberían estar dotadas de las competencias más amplias posible. Por ello, conscientes de que la existencia de las instituciones nacionales de derechos humanos puede constituir un mecanismo importante para reforzar la protección de esos derechos, debería examinarse a fondo su carta u otro texto constitutivo a fin de incrementar su eficacia en materia de protección de los derechos humanos.

33. Debido a la diversidad de los Estados y de las estructuras y modos de funcionamiento de sus instituciones nacionales para la promoción y la protección de los derechos humanos, cabe extraer dos corrientes de pensamiento: una que se pronuncia a favor de una participación directa, como fue el caso de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Argelia, Canadá, Francia y Túnez) y otra favorable a la participación de las instituciones nacionales con el estatuto de observador (Croacia, Iraq y Libia).

34. En cuanto a las instituciones nacionales, expresan el deseo de participar:

- a) en los períodos de sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos y de la Subcomisión;
- b) en las reuniones periódicas de los órganos creados en virtud de tratados;
- c) en las reuniones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

35. Por otra parte, algunas instituciones nacionales desean participar por su propia cuenta cuando la Comisión de Derechos Humanos aborde una cuestión que les interesa. Podría autorizárseles a tomar la palabra en su propio nombre. Esto significa que toda declaración o toma de posiciones hecha en período de sesiones y reunión de las Naciones Unidas no debe comprometer al gobierno (opinión del Observatorio Nacional de Derechos Humanos de Argelia y de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos de Francia). Otras instituciones desean también poder gozar de un estatuto análogo al de los organismos especializados de las Naciones Unidas (opinión de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos).

IV. RECOMENDACIONES

36. Teniendo en cuenta el precedente de la Conferencia de Viena, se formulan las recomendaciones siguientes para guiar a la Comisión de Derechos Humanos en sus debates y contribuir a la adopción de cualquier decisión que estime necesaria al respecto:

- a) en la hipótesis de que la Comisión decida que las instituciones nacionales participen en las reuniones de los órganos de la Naciones Unidas encargados de los derechos humanos, convendría que se pronunciara sobre la conformidad de la estructura y del funcionamiento de esas instituciones con los Principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales, según fueron aprobados por la Asamblea General en su resolución 48/134 de 20 de diciembre de 1994;
- b) la Comisión de Derechos Humanos debería estar informada de toda creación de institución nacional para poder atribuirle el estatuto apropiado, tras opinión del Comité de coordinación de las instituciones nacionales.
